



SEÑORA JUEZ LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL ESPECIALIZADO EN CRIMEN ORGANIZADO DE 1º TURNO.-

El **Fiscal Letrado Penal de Montevideo de Tercer Turno**, compareciendo en los autos caratulados **“C., N. – Un delito continuado de apropiación indebida en calidad de co-autor; U., M.S. – Un delito continuado de apropiación indebida en calidad de co-autora, en reiteración real con un delito de falsificación ideológica por un particular; S., M.B. – Un delito de falsificación ideológica por un particular en calidad de autora” S., F. – Un delito de lavado de activos, en calidad de autor” (Ficha I.U.E. No. 523-195/2017)**, evacuando el traslado conferido y deduciendo demanda acusación, a la Sra. Juez DICE:

I) HECHOS

1º) A partir del mes de febrero del año 2017, distintas personas damnificadas presentaron denuncias escritas contra los Sres. F.S.B. y N.C., directores de Camvirey S.A., casa cambiaria conocida como “Cambio Nelson” –con casa central en Punta del Este y múltiples sucursales en Maldonado y otros departamentos-, por presuntos delitos de apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondos, lo que motivó el inicio de una investigación presumarial a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 10º Turno, con intervención de la Fiscalía Letrada Departamental de Maldonado de 3er Turno.

2º) De las actuaciones de investigación cumplidas ante la Sede judicial de Maldonado, emerge que:

a) el Cambio Nelson comenzó a funcionar en el año 1998, y fue dirigido desde sus comienzos por W.S., quien colocó al frente del negocio al encausado N.C.

b) W.S. falleció el 30 de setiembre de 2015, y fueron sus sucesores sus hijos P., F. y G.S.

c) En los hechos, quien se hizo cargo de Cambio Nelson (Camvirey S.A.), a partir del fallecimiento de su padre, fue F.S. -imputado en la Causa Fa. 474-90/2017-, quien revestía la calidad de único integrante del Directorio y único accionista de la empresa, y en tal calidad dirigía la operativa del cambio, manejaba las cuentas, firmaba los cheques y efectuaba los depósitos de fondos; manteniéndose el imputado N.C. como gerente de la casa cambiaria.

d) El cambio Nelson –además de las operaciones cambiarias- se había incorporado a la red nacional de cobranzas Redpagos (Nummi S.A.); contractualmente, estaba estipulado que Camvirey S.A. debía depositar la totalidad del dinero recibido por terceros por concepto de cobro de servicios - que ascendían diariamente a una cifra promedio entre 10.000.000 \$ y 18.000.000 \$- en un plazo de 24 horas de recibidos, constando que desde el año 2016, comenzaron a existir desfasajes y los pagos a espaciarse en el tiempo, siendo en algunos casos sustituidos por cheques; hasta que en febrero de 2016, a raíz de esta situación, Nummi S.A. resolvió inhabilitar el funcionamiento de Redpagos dentro del cambio Nelson.

e) Asimismo, contraviniendo la normativa, el cambio recibía desde hacía varios años dinero de clientes, los que eran mantenidos como una suerte de “cuenta corriente” para pagos de distintos servicios, y en algunos casos, como depósitos que devengaban un interés superior al interés medio de plaza en otras entidades habilitadas. En algunos casos, los fondos depositados por los clientes ascendían a cientos de miles de dólares americanos; tales depósitos eran recibidos por caja y a modo de recibo, o de garantía, se extendía a los depositantes un cheque común postdatado, a 90 días.

f) Además de Camvirey S.A., FS tenía participación accionaria en otras empresas, tales como MESIT S.A. (edificio Artower), MIJAL S.A. (edificio Rambla 24) y FIROSOL S.A. (rentadora de vehículos), además de un emprendimiento sucesorio lechero en Ruta 9, todos los que también contaban con “cuentas corrientes” en el cambio.

g) El cambio Nelson cerró sus puertas al público en forma sorpresiva el día 21 de febrero de 2017, generando la presentación de múltiples denuncias de

clientes afectados. Su actividad fue suspendida por Resolución del Banco Central del Uruguay de fecha 1º de marzo de 2017.

3º) De la prueba incorporada a la causa -y a la mencionada causa paralelamente seguida contra F.S.B. (Fa. 474-90/2017)- surge plenamente acreditado que éste -desde fecha que no pudo ser precisada con fehaciencia pero que puede situarse en fecha próxima a sus inicios en la dirección del cambio- utilizó dineros captados por el cambio en la ilegal operativa descrita en el numeral precedente (dineros provenientes de depósitos de clientes, y dineros recibidos de terceros por concepto de Redpagos), para destinarlos parcialmente a las otras empresas de las que era titular, provocando de tal modo un desfasaje e iliquidez crecientes en el cambio, que terminaron por provocar su cierre y la posterior presentación a concurso voluntario. Tales transferencias a otras empresas no eran restituidas al cambio, lo que provocaba serios problemas de liquidez, que afectaron progresivamente el funcionamiento de la empresa al punto de verse obligada finalmente al cierre de su operativa. A modo de ejemplo, sólo la cuenta corriente de MESIT S.A. mantenía un saldo deudor cercano a U\$S 1,2 millones, en tanto MIJAL S.A. debía a Camvirey S.A. la suma de 800.000 U\$S; y Firoso S.A. debía a Camvirey S.A. la suma de 356.566 U\$S.

4º) Al respecto, un informe del Banco Central del Uruguay explica con claridad la operativa irregular: “Las evidencias obtenidas sugieren que la operativa de pagos y cobranzas se encontraba totalmente desvirtuada. Así también, se puede concluir que la empresa recibía regularmente fondos de clientes por fuera de sus actividades permitidas (lit. h del referido artículo 103) y los desviaba para su aplicación en otras actividades tampoco permitidas, esto es, el pago de gastos de empresas vinculadas y financiación de pago de cuentas de otros clientes (saldos deudores) considerando además los cuantiosos y reiterados movimientos deudores de sus accionistas y familiares cuyos saldos llegan prácticamente alcanzar el patrimonio de la empresa”. También expone el informe del Banco Central que la información contable remitida por el cambio al B.C.U. no reflejaba la real operativa desarrollada con los clientes, pues no mostraban la existencia de los saldos deudores y acreedores con clientes, de

tal forma que concluye que “los estados contables presentados al Banco Central del Uruguay no permitieron tener conocimiento de información relevante por parte del supervisor, a través de una exposición notoriamente distorsionada de la operativa real, con relación a las normas contables vigentes” (fs. 505 a 507). El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay explica a fs. 1078 vta. que “se identificó que una parte de los fondos, una buena parte, se utilizaba o se canalizaba a cuentas de la familia, para gastos de la familia y el financiamiento de proyectos en empresas que son vinculadas a los accionistas de Camvirey.

5º) En definitiva, a través de esta operativa de captación de fondos, el imputado S. distrajo continuamente dineros provenientes de clientes, para destinarlos a empresas vinculadas o a cuentas particulares, encontrándonos de tal modo en una conversión de fondos en provecho propio, que le habían sido confiados con una obligación de restitución o de darle un uso determinado; existiendo un importante número de personas damnificadas, que han presentado denuncias en autos. S. volcaba parcialmente los fondos indebidamente apropiados en otras empresas de las que era titular o accionista, y en adquisición de bienes inmuebles, otorgando de esta forma apariencia de licitud a tales dineros, en provecho propio. En definitiva, simultáneamente, transfería y convertía los dineros indebidamente apropiados de Camvirey S.A. -dotándolos de apariencia de licitud- a cuentas y emprendimientos personales. Así, se ha acreditado que durante el período en el cual S estuvo al frente de Camvirey S.A., se transfirieron fondos -entre otros- a MIJAL S.A. y a LINIBAN S.A.: así por ejemplo LINIBAN S.A. adquirió el bien inmueble Padrón N° xx, ubicado en Balneario El Tesoro (Departamento de Maldonado), el 12 de noviembre de 2016.

6º) Dentro de las irregularidades constatadas en el marco de la investigación, también resultó acreditado que a instancias del imputado F.S., el cambio remitía a la encausada M.B.S. -contadora externa a la empresa- información falsa relativa a las asistencias de los empleados del cambio, subdeclarando los ingresos de los trabajadores. Así por ejemplo, si un trabajador cobraba 25.000\$ líquidos, sin embargo en el recibo de sueldo constaba un ingreso por un

monto menor, entregándosele un recibo comercial por el resto; en tanto a muchos trabajadores se les descontaban días supuestamente no trabajados, pero se trataba de días en los que los mismos habían concurrido efectivamente a trabajar. La imputada U. explica con toda claridad a fs. 964 vta.: “F. (S.) como para bajar el BPS, desde hace 7 u 8 meses había empezado a poner faltas a los empleados, para bajar el pago al BPS” y se remitía dicha información falsa al estudio contable externo, por orden del imputado S. Y la Cra. G.P., quien cumple funciones en el Área de Fiscalización del Banco de Previsión Social, confirma a fs. 1505 y ss. que efectivamente el Banco constató irregularidades: “en determinados momentos (a los empleados) no les daban recibos de sueldo, le daban el dinero en efectivo y cuando les daban el recibo éstos venían con faltas que no eran reales, no es en todos los casos, hay que estudiar caso por caso, pero en la mayoría de los casos sí”, agregando historias laborales de algunos de los trabajadores afectados (fs. 1477 a 1504).

7°) Si bien la responsabilidad de la maniobra de apropiación detalladamente reseñada en los numerales precedentes debe ser atribuida en forma principal a F.S.B. (y así consta en la acusación fiscal formulada seguida contra el mismo: Fa. 474-90/2017), surge de autos la participación de los encausados N.C. y M.S.U., quienes -en distinto y menor grado- cooperaron a la consumación de la apropiación por actos sin los cuales el delito no se hubiera podido cometer, o al menos, no se hubiera podido cometer en la magnitud detectada. Veamos:

A) Actuación y responsabilidad del encausado N.D.C.:

El encausado C. era -desde los inicios y hasta el cierre- el gerente del cambio Nelson, encargándose de la operativa diaria de las sucursales: de tal manera que no le podía ser desconocida la irregular operativa del cambio, los continuos desvíos de fondos por parte de F.S., la creciente iliquidez y los desfasajes constatados. El propio C. lo admite: respondió a fs. 957 vta. que “sé que para alguna de esas empresas era, pero no sé cuáles; y a fs. 958, amplía su respuesta: “eran varias las empresas de F.S. que vivían del cambio, les pagábamos los sueldos, por ejemplo a Firoso, salían todos los gastos del cambio y no reintegraban nada. La plata salía de Camvirey y salía de la cuenta de Firoso, que era de F.S. El dinero llegaba a través del depósito de los

clientes...las órdenes de pago venían directamente al tesoro vía mail, de cada titular de las empresas...eran cuentas que estaban en negativo...y ese saldo negativo para mí era permanente” (fs. 958). También agrega a fs. 959 que C.S., la esposa del imputado S., también efectuaba retiros de las cuentas de Camvirey S.A., y que cree que tales retiros no eran reembolsados; y que por ejemplo MIJAL S.A. “le debe 800.000 U\$S al cambio” (fs. 959 vta.).

A pesar de ello, C. se mantuvo al frente del cambio, como la cara visible del mismo, y continuó recibiendo los depósitos de los particulares: muchos de los denunciados declaran que efectuaban sus depósitos directamente a él. Si bien alega haberse querido retirar del cambio a fines de 2016, lo cierto es que en definitiva continuó al frente del negocio y de la operativa; y de la misma forma, si bien expresa que cuando se empezaron a producir los desfases el cambio dejó de recibir depósitos, ha quedado acreditado a través de los testimonios de varios de los denunciados, que la operativa continuó -aunque decayendo- hasta poco antes del cierre definitivo del cambio (nótese que el propio encausado reconoce a fs. 157 vta. que “la operativa del cambio los días anteriores al cierre era normal”).

Como se expresó, muchos de los denunciados afirman haber depositado sus ahorros en el cambio dada la confianza que inspiraba C., junto a W.S., desde los inicios de la empresa. Es claro que sin la operación de captación de depósitos de particulares, y sin la implementación de cuentas corrientes sui generis como las descritas, la apropiación indebida de tales sumas de dinero no hubiera podido ser realizada. A modo de ejemplo, véanse las declaraciones de los siguientes denunciados:

- V.J.: “yo deposité el dinero...lo hice porque tenemos una gran amistad de por medio con el Sr. N.C.” (fs. 6);
- F.D.: “la relación de confianza era con N.C.” (fs. 48 vta.);
- C.E.: “el que nos ofreció este servicio (de cuenta corriente para pago a proveedores) fue C.” (fs. 63);
- M.J.G.: “decido depositar mi dinero con N.C.” (fs. 65);
- E.G.P.: “yo confié en N.C., que era el que conocía más” (fs. 135);
- P.G.N.: “N. es esposo de mi prima hermana... N. fue el que me ofreció, era la cara visible... el 21 de febrero (de 2017) hice el último depósito”;
- F.M.: “fui al cambio Nelson y hablé con N.C. ...y me abrió la cuenta” (fs. 436);

- H.N.: “en el cambio hablé con N. ...le llevé un poco de efectivo y le pregunté si la podía dejar en custodia y me dijo que sí... N.C. era el referente en el cambio” (fs. 437);
- Y.O.: “yo tenía un cheque de unos veinte mil dólares... se lo entregué a N.C. y no pude hacer efectivo el mismo” (fs. 5670).

Respecto de las responsabilidades de C. en el cambio, todos los testimonios recabados apuntan a que se trataba del gerente del cambio, y de quien daba las órdenes en la operativa diaria: la encausada U. declara que N. -junto con W.S. primero y F.S. después- era quien tomaba las decisiones en el cambio (fs. 961); K.T., en el mismo sentido, declara que C. era quien tomaba las decisiones en el cambio (fs. 1082); CD refiere que C. era quien tomaba decisiones en el área operativa (fs. 1047); y I.M. manifiesta que quien impartía las órdenes diarias para depósitos y transferencias era C. (fs. 5712 vta.).

B) Actuación y responsabilidad de la encausada M.S.U.:

La Contadora M.S.U. ingresó como funcionaria administrativa al cambio Nelson en 2011 y desde 2012 figuraba como Oficial de cumplimiento. En tal calidad, y de acuerdo a sus propias declaraciones, conocía la operativa irregular del cambio y la progresiva iliquidez derivada de los desvíos ya relatados: textualmente, expresa que “además de esas empresas también están las cuentas particulares de F., P.S. y sus hermanos, y de la esposa de F. Y salía del rubro 101 y 102, que es pendiente de liquidar, era dinero de clientes en pesos o en dólares pendientes de liquidar. Esa plata no era restituida. Por ejemplo, F. nos llevaba las tarjetas de crédito para que la pagáramos y él no traía la plata después. Para el Rambla 24 el primo también, nosotros depositábamos pero después no llevaba la plata. Mijal sobre todo debe 900.000 y algo de dólares a Camvirey. Todas las empresas deberían tener saldo negativo” (fs. 963).

Si bien alega desconocer las obligaciones que implicaba su designación como Oficial de cumplimiento, y reconoce que fue un error de su parte haber aceptado dicha figuración, todo lo cual no la exime de responsabilidad, es claro -según lo expresado por el Director de la U.I.A.F. del Banco Central del Uruguay a fs. 1079 vta- que “es la responsable de gestionar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, y a su vez

figura como responsable de la información suministrada al Banco Central del Uruguay, es el referente dentro de la entidad en relación a todos los requisitos de información establecidos en la normativa”.

De las declaraciones recibidas en autos, emerge que la Contadora U. desempeñó un rol importante en el cambio:

- C. declara que U. era “la mano derecha” de F.S.: “ella me supervisaba a mí y cuando me tomaba la licencia ella quedaba a cargo de todo” (fs. 956 vta.);
- C.D. declara que “había una caja en el fondo para las cosas grandes, atendía la Contadora U. ...era U. la jefa... era U. quien hacía la declaración de haberes de los empleados” (fs. 1047 vta. y 1048 vta.);
- J.L.S. expresa: “la contadora U. era la que estaba a cargo del Tesoro... todo lo que era movimiento de plata entre cuentas había que hablar con F. o S.U. ... U. interactuaba con F. todo el tiempo o por teléfono o en el sistema o en privado en cosas trascendentes, por ejemplo de dinero depositado de gente.... F. me dijo que ella (U) era sus ojos dentro de la empresa... la firma electrónica la tenían F. y U.” (fs. 1056 a 1057 vta.);
- K.T. explica que se llevaba una cuenta en el sistema “Dynatech” y otra cuenta denominada “Danubio”, dando a entender que una de ellas era una “cuenta en negro”, y quien controlaba esas planillas era S. (U.) y el resto lo hacía N. (C.): ver fs. 1082 vta.

En definitiva, y en forma similar a lo expresado con relación a C., la actuación de la imputada U. contribuyó a la consumación de las maniobras de desvío y apropiación de fondos por parte de S., por actos positivos y reiterados sin los cuales las mismas no podrían haberse realizado, al menos en la magnitud y con la continuidad con las que se verificaron. En efecto, en tanto responsable de suministrar información correcta al Banco Central, y de reportar operaciones sospechosas e irregulares, la encausada no cumplió con sus obligaciones, posibilitando la ejecución de los desvíos ya que -tal como concluye el Banco Central en su informe- “los estados contables presentados en este Banco Central no reflejan la real operativa desarrollada con los clientes, lo que eventualmente hubiera permitido detectar irregularidades en forma temprana... los estados contables presentados al Banco Central no mostraban la existencia de esos saldos deudores y acreedores con clientes, estando ocultos bajo el rubro disponibilidades” (véanse fs. 506 y 507).

De la misma manera, corresponde atribuirle responsabilidad como co-autora del delito de falsificación ideológica, por la subdeclaración de ingresos de los trabajadores.

8°) Respecto de la responsabilidad de la restante encausada, la Contadora M.B.S., la Fiscalía entiende por el contrario que no procede jurídicamente atribuirle co-autoría del delito, por lo que se solicitará su sobreseimiento. En efecto, en tanto contadora externa de la empresa, no era su obligación controlar la veracidad de los datos aportados por la misma, ni contaba con los medios para hacerlo. El rol de su estudio contable era únicamente el de expedir los recibos, en una operación casi automática, realizada a partir de la información suministrada por la empresa contratante; y aún surgiendo -como efectivamente consta en autos- que en algún caso llamó la atención el número de faltas de trabajadores y se consultó a la empresa, no puede decirse que existe conducta dolosa en el accionar de la contadora imputada, ni se trata de una cooperación intencional a través de actos sin los cuales el delito no se hubiera podido cometer, desde que -por ejemplo- los recibos podrían haber sido extendidos por la propia contadora dependiente del cambio.

Para comprender la operativa del estudio contable, es ilustrativo lo declarado por A.J.F.A. -empleada en el estudio de la imputada S.- quien a fs. 1063 explica: “del 1° al 10 solicitamos a los clientes que nos envíen la información correspondiente al mes a procesar y ahí confeccionamos con la información que se nos envía, los recibos de sueldo.... Los clientes envían la información del mes de los empleados, si hicieron horas extras, si tuvieran algún día libre más, si faltaron, si tuvieron suspensión... nosotros simplemente los confeccionamos (los recibos de sueldo) y los mandamos, reclamos de empleados desconformes no tuvimos”. Es decir que -aún llamando la atención los datos suministrados por la empresa- no existía forma material de comprobar la veracidad de los mismos, y en todo caso la responsabilidad recae naturalmente en el titular de la empresa que provee los datos al estudio.

9°) Consta asimismo que:

a) N.D.C.G., M.S.U. y M.B.S. fueron procesados, los dos primeros con prisión y la restante sin prisión, por auto No. 1141/2017, de 1° de abril de

2017, fundado por auto No. 1142, de 2 de abril de 2017 (fs. 1745 a 17732 vta.), dictados por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 10° Turno.

b) N.C. y M.S.U. fueron excarcelados durante el transcurso del proceso, hallándose actualmente ambos en libertad provisional.

c) C. es oriental, casado, de 58 años al tiempo del procesamiento; U. es oriental, soltera, de 33 años al tiempo del procesamiento; y S. es oriental, casada, de 48 al tiempo del procesamiento.

d) C., U. y S. son primarios absolutos, según resulta de las respectivas planillas de antecedentes judiciales obrantes a fs. 4731, 4732 y 4733.

II) PRUEBA

La prueba de los hechos reseñados surge de los siguientes elementos probatorios incorporados a la causa:

1. Denuncias presentadas y ratificadas por los damnificados V.J.G., D.M.B. y D.M.P., contra los titulares de Camvirey S.A., Sres. F.S. y N.C., por presuntos delitos de apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondo (fs. 1 a 37);
2. Denuncias presentadas y ratificadas por F.D.D. y C.E.F. (fs. 40 a 49 vta. y 63 a 64);
3. Testimonio de M.R.B. e incautación de mochila entregada por F.S., conteniendo dinero en efectivo y documentación varia (fs. 50 a 61);
4. Denuncia presentada y ratificada por M.J.G., y documentación aportada por la misma (fs. 65 a 120);
5. Declaraciones indagatorias en sede policial de la imputada M.S.U. (fs. 121 a 122);
6. Testimonio de G.C.F. (fs. 131 a 132);
7. Testimonio de la Escribana R.B.L. (fs. 142 a 143 vta. y 145);
8. Testimonio del Dr. M.E.B. (fs. 144);
9. Denuncias presentadas y ratificadas por F.M. y P.G.N. (fs. 148 a 156, 430 y vta. y 436 y vta.);
10. Declaraciones indagatorias en sede policial del imputado N.D.C.G. (fs. 157 a 158);

11. Allanamientos practicados previa orden judicial en establecimientos rurales y fincas de propiedad de F.S. o familiares directos, e incautación de dinero en efectivo y vehículos (fs. 169 a 202 vta.);
12. Documentación contable de Camvirey S.A. (fs. 205 a 258);
13. Entrega de dinero y documentación relativa a compra de bien inmueble padrón N° xx de Balneario El Tesoro, por parte de Liniban S.A. (fs. 259 a 285);
14. Denuncia presentada y ratificada por G.D.G. (fs. 312 a 314 y 438 y vta.);
15. Denuncia presentada y ratificada por H.G.N. (fs. 336 a 339 y 437 y vta.);
16. Denuncia presentada por R.D.P. y otros (fs. 372 a 374);
17. Denuncia presentada por T.S.R.L. y T.I. S.A. (fs. 382 a 383 vta.);
18. Allanamiento practicado previa orden judicial en el Cambio Nelson ubicado en Terminal de Punta del Este e incautación de dinero en efectivo, cheques y documentación varia (fs. 393 a 422);
19. Informe del Banco Central del Uruguay (fs. 452 a 454);
20. Informe del Banco Itaú Uruguay S.A. (fs. 456 a 457);
21. Denuncias presentadas y ratificadas por P.G.N., C.G.G.W., F.C.M., H.G.N., G.D.G., F.D.L., E.G.P., R.B., N.G., H.M., L.A.L., L.I. y A.P. (fs. 430, 433, 436, 437, 438, 445, 458 a 499);
22. Documentación e informe elaborado por el Banco Central del Uruguay (fs. 505 a 524);
23. Información proporcionada por la Dirección General de Registros (fs. 545 a 593);
24. Pericia elaborada por la Sección Delitos Tecnológicos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol (fs. 594 a 600 vta.);
25. Actuaciones indagatorias en sede policial (fs. 604 a 638);
26. Información aportada por la Dirección General Impositiva (fs. 640 a 695);
27. Relevamiento fotográfico de Policía Científica (fs. 696 a 740);
28. Información remitida por instituciones bancarias de plaza (fs. 741 a 746 y 905);
29. Información remitida por el Banco de la República Oriental del Uruguay (fs. 787 a 891);
30. Información remitida por la Auditoría Interna de la Nación (fs. 898 a 899);
31. Denuncias presentadas y ratificadas por H.C., F.D.L., D.A., A.G., A.L., A.S., R.P. y J.M.M. (fs. 909 a 916 vta. y 927 y vta.);

32. Denuncias presentadas y ratificadas por E.R.N. y M.D. (fs. 932 y vta. y 935 y vta.);
33. Declaraciones indagatorias del imputado N.D.C.G. en sede judicial (fs. 956 a 960), ratificadas a fs. 1721 y vta.; y ampliación de indagatoria (fs. 5759 a 5760 vta.);
34. Declaraciones indagatorias de la imputada M.S.U.M. en sede judicial (fs. 961 a 965); ratificadas a fs. 1721 y vta. (foliatura repetida por error); y ampliación de indagatoria (fs. 5761 y vta.);
35. Declaraciones indagatorias de la imputada M.B.S.A. en sede judicial (fs. 966 a 967), ratificadas a fs. 1723 y vta.; y ampliación de indagatoria (fs. 1524 y vta. y 5762 y vta.);
36. Denuncia presentada y ratificada por J.P.L. (fs. 969 a 970);
37. Denuncia presentada y ratificada por J.M.V. (fs. 1016 a 1017);
38. Denuncia presentada y ratificada por V.L.X. (fs. 1018);
39. Denuncias presentadas y ratificadas por W.F.N. y M.F.G.D. (fs. 1026, 1033 y vta. y 1035 a 1036);
40. Pericias efectuadas a teléfonos celulares incautados (fs. 1037 a 1040 vta.);
41. Denuncia presentada y ratificada por Y.O. (fs. 1044 y vta.);
42. Declaraciones indagatorias de C.C.D. en sede judicial (fs. 1047 a 1049);
43. Declaraciones indagatorias de J.L.S. en sede judicial (fs. 1056 a 1057 vta.);
44. Testimonio de O.M.F. (fs. 1060 a 1062);
45. Testimonio de A.F.A. (fs. 1063 a 1064);
46. Testimonio del Sr. Director de la U.I.A.F. del Banco Central del Uruguay, N.L. (fs. 1078 a 1079 vta.);
47. Testimonio de la Inspectora de la Dirección General Impositiva, M.G.B. (fs. 1080 a 1081);
48. Testimonio de K.L.T.P. (fs. 1082 a 1084);
49. Testimonio de SM (fs. 1086 a 1087);
50. Información aportada por el Banco de la República (fs. 1088 a 1105);
51. Declaraciones indagatorias de P.S.B. en sede judicial (fs. 1108 a 1111 vta.);
52. Testimonio y documentación aportada por el Dr. L.C. (fs. 1114 a 1198 vta.);
53. Declaraciones indagatorias de H.C.L. en sede judicial (fs. 1201 a 1204 vta.);
54. Ampliación de actuaciones policiales de investigación (fs. 1211 a 1451);
55. Denuncia presentada por M.D.A. (fs. 1455 a 1458);

56. Declaraciones indagatorias de F.S.B. en sede judicial (fs. 1466 a 1476 vta.), ratificadas a fs. 1722 y vta.;
57. Historias laborales de empleados de Camvirey S.A. (fs. 1477 a 1504);
58. Testimonio de funcionaria del Area de Fiscalización del B.P.S., G.P. (fs. 1505 y vta.);
59. Testimonio de M.R.L. (fs. 1506 a 1509 vta.);
60. Testimonio de J.L.A. (fs. 1508 a 1509);
61. Testimonio de G.S.P. (fs. 1510 a 1511);
62. Testimonio de A.S. (fs. 1513 a 1514);
63. Diligencia de careo entre F.S. y N.C. (fs. 1517 a 1518 vta.);
64. Diligencia de careo entre F.S. y H.C. (fs. 1519 a 1521 vta.);
65. Declaraciones ampliatorias de F.S. (fs. 1522 a 1523);
66. Declaraciones ampliatorias de M.B.S. (fs. 1524 y vta.);
67. Declaraciones ampliatorias de M.S.U. (fs. 1525 y vta.);
68. Declaraciones ampliatorias de N.D.C. (fs. 1526);
69. Testimonio de actuaciones cumplidas ante el Juzgado Letrado de Concursos de 1° Turno (fs. 1528 a 1716);
70. Denuncia presentada por A.G.C. (fs. 1717 a 1720);
71. Documentación relativa a estados y movimientos contables (Piezas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14);
72. Denuncias del Banco de la República por libramientos de cheques contra cuenta suspendida (fs. 4363 y 4374);
73. Denuncia presentada por C.A.C. (fs. 4380 a 4381);
74. Informe pericial del Cr. M.A. (fs. 4392 a 4395);
75. Pericia elaborada por la Sección Delitos Tecnológicos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol (fs. 4398 a 4402);
76. Balances de saldos de Cambio Nelson (fs. 4403 a 4442);
77. Informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay; y documentación agregada (fs. 4454 a 4603 y 4750 a 4775);
78. Pericias elaboradas por la Sección de Delitos Tecnológicos (fs. 4812 a 4866);
79. Actuaciones del Banco Central del Uruguay (fs. 4887 a 4932);

80. Informe del Síndico en el Proceso Concursal de Camvirey S.A. (fs. 4998 a 5009);
81. Recibos de sueldo de Camvirey S.A. (fs. 5015 a 5200);
82. Testimonio de las actuaciones sustanciadas en el Expediente Ficha I.U.E. 2-5571/2017), relativas a la medida de inmovilización de activos dispuesta por la Sede (fs. 5395 a 5462);
83. Informe de inspección de la Dirección General Impositiva (fs. 5468 a 5481 vta.);
84. Declaraciones indagatorias de J.G.G. (fs. 5577 y vta.);
85. Declaraciones indagatorias de A.C. (fs. 5579 a 5580);
86. Declaraciones de los denunciantes L.A.L. (fs. 5672), L.G.I. (fs. 5673), M.G.C. (fs. 5674 a 5675), R.B. y J.M.V. (fs. 5676 a 5677), V.X.G. (fs. 5678), J.P.L. (fs. 5679), Y.O. (fs. 5680) y W.N.A. (fs. 5681);
87. Declaraciones indagatorias de S.P. (fs. 5709 a 5711);
88. Declaraciones indagatorias de I.T.M. (fs. 5712 a 5713);
89. Declaraciones indagatorias de P.L.M. (fs. 5714 y vta.);
90. Declaraciones indagatorias de J.N.S. (fs. 5715 y vta.);
91. Declaraciones indagatorias de E.R. (fs. 5529 a 5730);
92. Resultancias de los expedientes relacionados Fa. 474-90/2017 (causa principal seguida contra FSB); Fa. 2-5571/2017: inmovilización de activos; Fa. 474-201/2017: medidas cautelares; Fa. 523-457/2017; Fa. 506-62/2017; Fa. 2-5952/2017: testimonio del proceso concursal de Firosol S.A.; Fa. 523-100/2018: tercería de dominio promovida por Firosol S.A. respecto de vehículo camioneta marca Audi matrícula xxx; otras tercerías de dominio; y Anexos Documentales incorporados al principal.

III) CALIFICACIÓN JURÍDICA

A) TIPIFICACIÓN

La conducta del encausado N.C. se adecua típicamente a la figura delictiva prevista en el artículo 351 del Código Penal (“Apropiación indebida”), debiendo responder en calidad de co-autor (art. 61 num. 4 del C.P.), y en la modalidad de delito continuado (art. 58 C.P.)

La encausada M.S.U. deberá responder por un delito continuado de apropiación indebida (art. 351 C.P.), en reiteración real con un delito continuado de falsificación ideológica por un particular (art. 239 C.P.), ambos en calidad de co-autora (art. 61 num. 4 C.P. respecto del primer delito; y art. 61 num. 3 C.P. respecto del segundo delito).

B) CIRCUNSTANCIAS ALTERATORIAS

Como circunstancias atenuantes genéricas, se computarán-como atenuantes- y para ambos encausados, la primariedad absoluta y la confesión parcial (análogas: art. 46 num. 13 C.P.); y el haber procurado la reparación del mal o la atenuación de sus consecuencias (art. 46 num. 8), por cuanto surge que el imputado F.S. hipotecó y puso a disposición otros bienes de su propiedad -aún antes del inicio del proceso concursal- para cubrir la iliquidez del cambio derivada de las sumas indebidamente apropiadas (esta circunstancia atenuante de carácter real se comunica a los encausados en la presente por aplicación de lo dispuesto en el art. 52 del Código Penal).

No se juzgan de aplicación circunstancias agravantes.

C) FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO DE LA ENCAUSADA MBS

Respecto de la restante encausada, M.B.S., y por las consideraciones expuestas en el numeral 8 del Capítulo de Hechos precedente, se solicitará su sobreseimiento en la presente causa, en base a lo establecido en el art. 236 numeral 1° del Código del Proceso Penal D.L. 15.032.

No se verifica en su caso dominio del hecho, ni realización dolosa de un acto decisivo para la consumación del delito, ni la contadora externa es fedataria pública de la veracidad de la información suministrada. En efecto, el artículo 59 del Código Penal regula que “son responsables del delito, además del autor, todos los que concurren intencionalmente a su ejecución, fuere como co-autores, fuere como cómplices”. De manera que -descartado que se trate de una conducta sin la cual el delito no se hubiera podido cometer (en cuyo caso encuadraría en una hipótesis de co-autoría, según el art. 61 num. 4°), debe analizarse si existió una cooperación intencional, o una instigación, o una inducción al delito, lo que no se verifica en el caso, por las consideraciones ya

desarrolladas. No surge en la especie que la Contadora imputada hubiera sugerido o recomendado a su cliente formular la falsa declaración de haberes, ni se hubiera prestado dolosamente a la confección de los mismos; sino que su conducta se limitó a confeccionar los recibos, en la forma de estilo, sin que exista un deber de chequear la veracidad de la información suministrada por el cliente.

Distinta sería la solución -naturalmente- si un contador externo conociera la mendacidad de los datos proveídos, o conociera la intención del cliente de defraudar al ente previsional abonando menor cantidad de aportes, lo que no se desprende de la prueba incorporada a la causa.

PETITORIO

Por los fundamentos expuestos, disposiciones legales citadas y atento a lo previsto en los arts. 239 y 351 del Código Penal: en el artículo 58 literal E del D.L. 14.412, y en los artículos 54 y 63 del D.L. 14.294, y disposiciones concordantes y complementarias del Código del Proceso Penal D.L. 15.032, **el MINISTERIO PÚBLICO PIDE:**

Se condene a N.D.C.G. como co-autor responsable de un delito continuado de apropiación indebida a la pena de 2 (dos) años y 1 (un) mes de penitenciaría, con descuento de la preventiva cumplida.

Se condene a M.S.U.M. como co-autora responsable de un delito continuado de apropiación indebida y co-autora de un delito continuado de falsificación ideológica por un particular, en régimen de reiteración real, a la pena de 18 (dieciocho) meses de prisión, con descuento de la preventiva cumplida.

En ambos casos serán de cargo de los acusados las prestaciones legales accesorias de rigor.

Se decrete el sobreseimiento de M.B.S.A. en la presente causa.

Montevideo, 1° de febrero de 2021.

LP

Dr. Luis Pacheco Carve

Fiscal Letrado Penal de Montevideo de 3^{er} Turno